

Talca, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno.

VISTO:

1.- Se confirma la resolución de fecha 29 de marzo de 2019, que recibió la causa a prueba.

2.- Respecto de la sentencia de fecha 20 de marzo de 2020, apelada por la parte demandante, en cuanto al monto de indemnización fijado para éstos y por no haberse condenado en costas al Fisco demandado y apelada a su vez, por la parte demandada por haberse rechazado la excepción de prescripción extintiva alegada y subsidiariamente, solicita rebaja del monto fijado por concepto de indemnización:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de los considerandos Noveno, Undécimo, Duodécimo, y Décimo Cuarto al Décimo Octavo ambos inclusive Y CONSIDERANDO:

I) Que la contienda entre las partes dice relación, con la pretensión de los demandantes en hacer efectiva una indemnización por daño moral, por la responsabilidad extracontractual del Estado, con motivo de la detención de don Luis Leopoldo Sepúlveda Núñez, acontecido el 17 de septiembre de 1973 en el Reten de Carabineros de Antuco, fecha desde la cual desapareció, desconociéndose su paradero y que llegada la democracia, el Estado de Chile a través del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, también conocido como “Informe Rettig” cuyo informe final fue entregado el 9 de febrero de 1991, en el cual se considera a Luis Sepúlveda Núñez, víctima de violaciones a los derechos humanos, reconociendo que éste desapareció a manos de agentes del Estado de Chile el 17 de septiembre de 1973. Versus la alegación principal que realiza la parte demanda en cuanto a que la acción que se pretende estaría prescrita.

II) Que es de la esencia y naturaleza del acto generado por el Gobierno de la época, a través de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación vertida en el “Informe Rettig”, que éste reconocimiento por parte del Estado de Chile, como un acto reparatorio implicó, aceptar la Responsabilidad Extracontractual que le corresponde al Estado, por los hechos establecidos por dicha Comisión y en genera consecuencia jurídicas como la obligación asumida por el Estado de reparar e indemnizar los mismos y atendido que los plazos de prescripción están establecidos a su favor, plazos que son



esencialmente renunciables y que conforme se manifiesta por dicho acto, único e inédito, como acto reparatorio y de reconciliación, es legalmente plausible, ante los lamentables hechos históricos que dividieron al País, por innegables hechos de vulneración y violación de derechos humanos, por parte de algunos agentes del Estado, que afectaron a parte de la población y sin que ello implique jurídicamente mutar una Institución de derecho público, como lo es la prescripción, toda vez que, no puede dejar de reconocerse los efectos jurídicos de éste produce como, acto del Estado inédito, único de reparación por dichos hechos y de reconciliación nacional. De manera tal que, ante dicho reconocimiento renace para los actores el derecho a la acción de indemnización del daño moral que motiva la demanda de auto, ello conforme se regula en la normativa Civil interna aplicable al caso y que le da la competencia al juez del grado.

III) Qué, dado lo sostenido por la parte demandante y el fallo recurrido, se estima preciso aclarar, en lo que refiere el primero, en cuanto a que el hecho delictivo y dañoso que origina el efecto civil del mismo, sería un delito de lesa humanidad, analizando e indicando qué respecto de los crímenes de lesa humanidad, como graves que son, las penas que en ellos se impongan deben cumplirse en su totalidad sin cabida a ningún tipo de beneficios. Sin embargo es el caso que ningún fallo de dicha naturaleza es base de la acción deducida en esta causa indemnizatoria, toda vez que no se ha sustentado en sentencia condenatoria por delito de lesa humanidad, sino en el acto generado por el Gobierno de la época, en el que se reconoce por parte del Estado la condición de detenido desaparecido, que le dio la comisión, en el informe Retting (1991), a don Luis Sepúlveda Núñez, como víctima de violaciones a los derechos humanos, reconociendo que éste desapareció a manos de agentes del Estado de Chile el 17 de septiembre de 1973.

Además, que es necesario recordar que la ley 20.357 que tipifica y sanciona los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra entró en vigor el 19 de julio de 2009 y qué, por los principios de irretroactividad de la ley penal en relación a principio de “in dubio pro reo”, no es posible categorizar este delito en hechos ocurridos de manera previa a la promulgación de dicha ley.

Tampoco en la legislación chilena antes de la ley 20.357, estaba tipificado y sancionado específicamente el delito de violación a los derechos



humanos a que hace referencia la Juez del grado, sino diversos delitos comunes, agravados cuando son cometidos por funcionarios públicos o agentes del Estado.

De esta manera desde el punto de vista legal y de la realidad fáctica de la normativa vigente, teniendo en claro de qué no existió en esta causa una condena específica por delito de lesa humanidad, ni por el delito de violación a los derechos humanos, mal debería entonces exigir la parte demandante o aplica la juez del grado, normas distintas a las generales establecidas en la legislación, en este caso respecto a los efectos civiles que para el Estado de Chile, implica un acto reparatorio y de reconciliación nacional, que ha generado el reconocimiento de la condición de detenido desaparecido que se le atribuye a don Luis Sepúlveda Núñez, como víctima de violaciones a los derechos humanos, en manos de agentes del Estado de Chile el 17 de septiembre de 1973, en el ya referido informe Rettig en 1991.

IV) Que, así las cosas y situado el conflicto en la normativa interna aplicable al efecto, conforme el artículo 2.314 del Código Civil. Que establece, “el que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito”. Siendo esta la regla básica en la legislación chilena en relación a la responsabilidad civil derivada de la responsabilidad extracontractual.

Asimismo, la acción civil derivada de delitos o cuasidelitos prescribe en cuatro años, contados desde la perpetración del acto conforme lo indica el artículo 2332 del Código Civil respecto de la responsabilidad civil extracontractual, diferenciándola de la responsabilidad civil derivada del cumplimiento de obligaciones, donde el plazo de prescripción se fija en 5 años, contados desde que se hizo exigible la obligación por regla general. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2514, en cuanto establece que, la prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo, durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones. Se cuenta este tiempo desde que la obligación se haya hecho exigible. Y en el artículo 2497 que establece, las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, de las iglesias, de las municipalidades, de los establecimientos y corporaciones nacionales, y de los individuos particulares que tienen la libre administración de lo suyo.



V) Que asimismo, cabe recordar, que la prescripción es una institución de derecho público, que tiene por objeto dar certeza jurídica, siendo la regla general aplicables a los derechos y acciones tanto en el ámbito del derecho público, como en el derecho privado, constituyendo la excepción la imprescriptibilidad, aplicable en ciertas acciones de naturaleza penal, para perseguir las responsabilidades en dicho ámbito y que por cierto están expresamente establecidas en la ley interna y en los tratados internacionales y por lo tanto deben ser de aplicación e interpretación restrictiva. No advirtiendo fundamento jurídico alguno, en cuanto a que la responsabilidad Civil que le corresponde al Estado por los actos de sus agentes, en que se hayan declarado imprescriptible las acciones civiles de carácter patrimonial, como las que se persiguen en la presente causa.

En efecto, en norma alguna de derecho internacional sobre derechos humanos incorporados al derecho interno, se establece la imprescriptibilidad de las acciones civiles, debiendo efectuarse la necesaria distinción respecto del hecho que origina esta acción, en cuanto a la acción penal para perseguir la responsabilidad de dicha naturaleza en los agentes del Estado, que en ello participaron y la acción civil de contenido patrimonial que como consecuencia de ello se generan y se pretenden respecto del Estado, acciones ambas, que responden a principios y normativas jurídicas diversas, lo que es absolutamente congruente al ordenamiento nacional e internacional, más aún cuando, ninguno de los preceptos internacionales citados por la parte demandante impide aplicar el derecho propio de cada país.

VI) Que conforme lo razonado, acorde a la naturaleza de la acción civil que se ejerce en la presente causa y debiendo en consecuencia computarse los plazos de prescripción a partir de la entrega del informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, también conocido como “Informe Rettig”, esto es marzo de 1991, donde el Estado asume nuevamente la responsabilidad de reparar y en consecuencia indemnizar por los actos que reconoce (a través de dicho acto inédito y único, ya analizado y que en ningún caso muta la institución de la prescripción), por lo que a la fecha de la notificación de la demanda de autos esto es 7 de septiembre de 2018, habían transcurrido más de 27 años, cumpliéndose en exceso tanto los plazo establecido para la prescripción extintiva de la acción indemnizatoria impetrada en autos por aplicación del artículo 2332 del Código Civil de cuatro años, el que incluso



pudiera estimarse de 5 años al tenor de la norma interna que establece un plazo mayor para exigir el cumplimiento de obligaciones. Sin que ello signifique una pugna con normas o principio alguno del derecho internacional en materia de Derechos Humanos. Por el contrario, diversas normas internacionales, entre ellas, el Pacto de San José de Costa Rica refieren que a falta de regla internacional específica lo que corresponde es la aplicación del derecho interno o nacional, situación que es aplicable a la presente causa en relación a la excepción planteada por el Fisco de Chile.

Qué tal criterio ha sido además, ratificado de manera expresa por jurisprudencia del máximo Tribunal del país a través de diversos fallos, como criterio jurídico aplicable, lo que resulta asimismo concordante con el espíritu de justicia y equidad que debe gobernar las decisiones judiciales, en un sentido de igualdad ante la ley, lo que asimismo es una garantía constitucional establecida por la Carta Fundamental. Sostener lo contrario implicaría llevar al absurdo jurídico, de erradicar la certeza jurídica y aceptar el ejercicio de las acciones civiles de índole patrimonial, como lo son las acciones indemnizatorias que persiguen la responsabilidad extracontractual del Estado, incluso por hechos históricamente reprochables acontecidos en el pasado, sin límite de tiempos razonablemente aceptables.

Por esas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 2314, 2332, 2497, 2514, 2515 del Código Civil; artículos 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se revoca el fallo de fecha 20 de marzo de 2020, y en su lugar se declara que se acoge la excepciones de prescripción extintiva de la acción, planteadas por el demandado Fisco de Chile, por lo que no se hará lugar a la demanda, todo ello sin costas de la causa y del recurso.

Acordada con el voto en contra del Ministro don Gerardo Bernalles Rojas, quien estuvo por confirmar la sentencia apelada en mérito de las siguientes consideraciones:

1º) Que si bien es cierto nuestra legislación establece plazos de prescripción en materia civil, no podemos desafectar este proceso en concreto de su naturaleza; y en este sentido, debemos recordar que los hechos están constituidos por las violaciones a los derechos humanos cometidas por el estado de Chile en contra de los demandantes, y si bien en autos se ha estimado que desde el fin de la dictadura (o retorno de la democracia), esto es,



desde el 11 de marzo de 1990 hasta el 7 de agosto de 2018 (fecha en que se presenta la actual demanda) ha transcurrido más que suficientemente el plazo de prescripción para ejercer la acción civil, se trata de una materia especial, que ha tenido un trato especial, tanto en la doctrina, como en la jurisprudencia internacional y nacional.

2º) Que los hechos se remontan al 17 de septiembre de 1973, por ello vale preguntarse entonces ¿por qué se puede demandar en la fecha en que lo hizo la actora, si para el derecho civil común el plazo estaría prescrito?. Y la respuesta está dada por la naturaleza de la acción entablada, es decir, estamos en presencia de una acción indemnizatoria del daño moral respecto de un crimen calificado como violación de derechos humanos, por lo tanto, estamos frente a la demanda civil ejercida en virtud de hechos calificados por el Estado de Chile, como crímenes de lesa humanidad, y cuya acción tiene el carácter de imprescriptible, y tal como lo ha señalado el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “*Ordenes Guerra contra Chile*”¹.

3º) Que lo anterior se justifica con el hecho notorio y conocido de que no hubo posibilidades de hacer efectiva la acción ante los tribunales durante el gobierno militar en estos casos. Si bien ello lo argumenta en base a lo que ya la jurisprudencia ha señalado reiteradamente, tal situación, no obstante, se basa en antecedentes de Justicia y Derecho humanitario principalmente, por cuanto no puede racionalmente suponerse que el sólo hecho de la vuelta a la democracia traería consigo el “efecto mágico” de normalizar la historia de un país que vivió bajo una situación de anormalidad constitucional por 17 años; nunca ha existido en la historia de la humanidad un cambio automático y de efectos inmediatos, desde un régimen autoritario a uno democrático; hay eventos que permiten observar un cambio de actitudes y también de normativas que pretenden devolver la vida cívica constitucional a la normalidad, considerada así según los estándares internacionales, mas, ello no es óbice a que muchas prácticas y defectos burocráticos; temores civiles,

¹ Sentencia Corte IDH, caso “Ordenes Guerra y otros contra Chile”, de 29 de noviembre de 2018, “117. No obstante, en definitiva, el daño ocasionado por esa falta de acceso a la justicia es que las víctimas no han recibido aún las indemnizaciones que les corresponderían y, si se aceptara el argumento del Estado, la consecuencia necesaria es que aquéllas quedarían sin la posibilidad de acceder a reparaciones tanto en el ámbito interno como internacional. Todos los familiares de las víctimas de este caso son personas desaparecidas o ejecutadas, y en algunos casos torturados, en hechos calificados como crímenes contra la humanidad, que han sido reconocidos por el Estado a través de la Comisión Rettig y ante este Tribunal”.



militares y gubernamentales; acción de fuerzas de facto; y otros cientos o miles de factores impidan tener un Estado de Derecho Democrático y Constitucional, plenamente eficaz, y mucho menos al día uno de la vuelta a la democracia.

Bajo el derecho humanitario no es posible, ni admisible, suponer que todos recuperamos la plenitud de la capacidad cívica, jurídica y psicológica para poder demandar al Estado de Chile, las ciencias sociales y humanistas así lo señalan. Por lo anterior, y volviendo al argumento principal, si la propia demandada reconoce la situación excepcional que justifica la imprescriptibilidad de la acción penal, no puede, en materia civil, aplicarla para un período determinado y no aplicarla para otro período; ello es arbitrario, y si no hay ley que haga tal distinción, no le corresponde al Estado hacerla, por lo demás, si así se quisiera, es la misma demandada la que hace las leyes, y no la ha hecho en este sentido. Así, la demandada, o alegaba la aplicación de la prescripción desde la fecha en que ocurrieron los hechos o bien asumía la situación extraordinaria, que era algo más lógico y obvio, para lo cual, no podía aplicar tales normas de prescripción, pero no podía aplicar ambas teorías en el mismo caso.

4º) Que se está demandando un daño moral, pero ¿la determinación del daño moral respecto de que situación? No resulta racionalmente posible fijar un daño moral sin que previamente se haya determinado la existencia de un delito y sus responsables, en el mejor de los casos ello puede hacerse conjuntamente, pero nunca antes de que esté establecida la responsabilidad penal, exigir lo contrario significa que nunca podría condenarse civilmente ya que no habría delito, ni pena, ni hechos ni responsables, y lo que es peor, ni siquiera el cuerpo de la víctima.

Además ¿si en materia penal no se establece el hecho dañoso para demandar indemnización de perjuicios, como se iba a exigir establecerlo en materia civil sin afectar lo penal? No hay que olvidar que las desapariciones forzosas, las ejecuciones sumarias y los secuestros calificados fueron negados sistemáticamente por las autoridades de la época, y hasta hoy ello ocurre por muchos de los actores políticos, por lo que sólo la sentencia definitiva que establece la ocurrencia del hecho negado, es la que permite establecer el plazo para la reclamación de la indemnización. También recordemos que en el caso del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, su muerte fue declarada



oficialmente, en su oportunidad, como consecuencia de una enfermedad; y hoy, desde hace poco se ha vuelto a investigar como magnicidio, el que estuvo oculto hasta hace poco tiempo, donde aparecen los procesamientos por considerar ahora, muchos años después, que su muerte fue intencional; no cabe duda alguna que de haber demanda civil tendrá derecho también a demandar la indemnización civil, sin embargo, hasta antes de confirmarse la intervención de terceros en su muerte no había delito, ¿era posible demandar civilmente entonces? No, porque a lo imposible nadie está obligado. No puede esperarse que ocurran casos emblemáticos para cambiar de criterios, toda vida, cualquier vida bajo el Derecho Humanitario tiene la misma importancia.

5°) Que también existen razones de Estado que dieron los tribunales en materia de violaciones a los derechos humanos para no investigar, o para sobreseer; el argumento fue la no existencia de dichas violaciones, las que solo se reconocieron a partir de los Informes Rettig y posteriormente Valech respecto de los torturados y presos políticos. Por lo tanto, si para la justicia y el Estado de Chile no existían dichos delitos hasta esa fecha, ¿Cómo es posible demandar los perjuicios y el daño moral antes de que el propio estado reconozca tales hechos? No puede la naturaleza patrimonial de la reparación pasar por sobre la naturaleza excepcional que tenga la causa material del daño causado cuando se violan los derechos humanos; es decir, no se trata del funcionario público que actuando con dolo o negligencia causó daño a un civil, se trata de un funcionario público que actuando con dolo, instigado, ayudado y protegido por el Estado de Chile, comete crímenes calificados como de lesa humanidad en busca de un fin propio del terrorismo de Estado. Por ende, no puede existir analogía de criterios donde no hay similitud de causa, ni donde tampoco hay similitud de naturaleza de la acción ni mucho menos similitud de normas aplicables; en el primer caso el funcionario público se rige por el derecho penal y derecho administrativo; en estos casos, en que la causa de pedir es una violación de derechos humanos, se rige por la Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos en primer término; y después de ello, por la legislación interna respectiva, en lo que no contradiga dichas normas, sin perjuicio que este mismo razonamiento es el que se encuentra implícito en materia penal.

6°) Que aplicar este criterio excepcional para un caso excepcional, tampoco constituye novedad para el ordenamiento civil chileno, puesto que



existen acciones imprescriptibles para temas menos sensibles y muchos más ordinarios que éste; como el artículo 1317 del Código Civil relativo a la partición de bienes; el artículo 195 del Código Civil relativo al ejercicio de la acción de filiación; por otro lado tenemos la acción de nulidad de derecho público establecida en la Constitución, de manera tal que reconocer esta situación excepcional no es anormal, no es temeraria, ni mucho menos injusta, al contrario; nuestra Carta Fundamental por la vía del inciso 2° del Artículo 5 nos liga directamente con la Convención Americana de Derechos Humanos, en cuyo artículo 63.1 se dispone que cuando se han violado los derechos reconocidos por dicha Convención, que es el caso concreto en autos, se debe, entre otras medidas, pagar una justa indemnización; para lo cual incluso en el Caso “Velásquez Rodríguez vs. Honduras” las Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que tiene competencia incluso para ver la inaplicabilidad de las normas de derecho interno en cuanto estas constituyan un obstáculo para la protección de sus derechos. Dicha afirmación no la expresa condicionada ni restringida sólo a materia penal, y además la formula dentro del contexto de la justa reparación, que es un tema evidentemente patrimonial. Además, resultaría totalmente ajeno a la práctica y costumbre jurídica actual del derecho chileno, cada vez más dependiente y férreo defensor de sus compromisos comerciales y patrimoniales en el ámbito internacional, si en este tema, violaciones de derechos humanos, hiciéramos caso omiso y contrario de lo que exigen los Tratados, Pactos y Convenios internacionales, todos los cuales tienen una categoría superior y constitucional cuando se trata de derechos humanos. Por otro lado, la misma Convención Americana habla del nexo - causal entre la violación del derecho con su reparación, de manera tal que si no tenemos antes ese reconocimiento, difícilmente podemos demandar indemnización. Por último, en este tema, las sentencias condenatorias en materia de violaciones de derechos humanos, sede penal, deben tener un efecto útil, y parte de ese efecto útil incluye la reparación mediante el pago de una justa indemnización, de manera tal que no hay otra forma de cumplir con las normas internacionales en materia de derechos humanos que impone la voluntaria ratificación e incorporación de Chile a la Convención Americana de Derechos Humanos, sino es permitiendo el ejercicio de la acción civil pertinente cada vez que se ha obtenido una sentencia condenatoria en materia penal, razonar distinto, por muchos criterios



doctrinarios que existan, implica, en nuestra realidad, exponer imprudente e injustificadamente a Chile a una nueva sanción internacional.

7º) Que en relación a la seguridad jurídica, ya no cabe duda que la seguridad jurídica como valor del derecho tiene sus excepciones, algo que vemos en este mismo tema, el de las violaciones a los derechos humanos, en sede penal. De esta forma dicho valor no constituye un absoluto, y la generalidad de las excepciones está constituida en relación a la naturaleza de la materia. En este caso, la reparación concreta y directa es un derechos fundamental, y la misma Convención Americana reconoce expresamente (artículo 63) que una parte de la reparación es el derecho a una indemnización justa, y esto es sumamente relevante; no sólo exige una indemnización, sino que además que ella sea justa, por lo que no cabe duda alguna del contenido de la norma; y más aún, si dicha norma no existiera (sabemos que existe), aun así, sería inaplicable la prescripción por aplicación del *ius cogens*, no debiendo olvidarse que siempre, cuando se trate de un tema de derechos fundamentales, aún en sede patrimonial, la interpretación de las normas debe ser conforme al principio *pro homine o favor persona*.

8º) Que alega la demandada que la jurisprudencia ha dictado fallos que acogen su teoría, pero omite indicar que también hay fallos que acogen la teoría de la demandante, por lo que no se trata de una cuestión pacífica, y la opinión jurisprudencial mayoritaria puede cambiar en cualquier momento.

9º) Que, a mayor abundamiento, la reiterada jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema precisa que, “*tratándose de un delito de lesa humanidad -lo que ha sido declarado en la especie-, cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la correlativa acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción contempladas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional, en armonía con el inciso segundo del artículo 5º de la Carta Fundamental, que instauro el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, e incluso por el propio derecho interno, que, en virtud de la ley N° 19.123, reconoció en forma explícita la innegable existencia de los daños y concedió también a los familiares de aquellos calificados como detenidos*



desaparecidos y ejecutados políticos, por violación a los derechos humanos en el período 1973-1990, regalías de carácter económico o pecuniario. En esta línea discurren también SCS Nros. 20.288-14, de 13 de abril de 2105; 1.424, de 1 de abril de 2014; 22.652, de 31 de marzo de 2015, entre otras. Por ende, cualquier pretendida diferenciación en orden a dividir ambas acciones y otorgarles un tratamiento desigual resulta discriminatoria y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad indispensables en un Estado de derecho democrático. Entonces, pretender el empleo de las disposiciones del Código Civil en la responsabilidad derivada de crímenes de lesa humanidad posibles de cometer con la activa colaboración del Estado, como derecho común supletorio a todo el régimen jurídico, hoy resulta improcedente.

□ Por lo demás, la reparación integral del menoscabo no se discute en el plano internacional, ni se circunscribe a los autores de los crímenes exclusivamente, sino también se prolonga hacia el mismo Estado. La preceptiva internacional no ha creado un sistema de responsabilidad, lo ha reconocido, desde que, sin duda, siempre ha existido, con evolución de las herramientas destinadas a hacer más expedita, simple y eficaz su declaración, en atención a la naturaleza de la violación y del derecho violentado.

Sexto: Que en el caso en estudio, dado el contexto en que los hechos se desarrollaron, con la intervención de agentes del Estado, amparados bajo un manto de impunidad forjado con recursos estatales, trae no sólo aparejada la imposibilidad de declarar la prescripción de la acción penal que de ellos dimana sino que, además, la inviabilidad de constatar la extinción, por el transcurso del tiempo, del probable ejercicio de la acción civil indemnizatoria derivada de ellos.

Séptimo: Que, además, la acción civil aquí deducida por los demandantes en contra del Fisco, tendientes a conseguir la reparación íntegra de los detrimentos ocasionados, encuentra su fundamento en los dogmas generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su consagración normativa en los tratados internacionales ratificados por Chile, los cuales obligan al Estado a reconocer y proteger este derecho a la reparación completa, en virtud de lo ordenado en los artículos 5°, inciso segundo, y 6° de la Constitución Política de la República.



Los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos preceptúan que la responsabilidad del Estado por esta clase de sucesos queda sujeta a disposiciones de Derecho Internacional, que no pueden quedar incumplidas a pretexto de hacer primar otros preceptos de derecho interno, por cuanto, de ventilarse un hecho ilícito imputable a un Estado surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la transgresión de una regla internacional, con el subsecuente deber de reparación y de hacer cesar los colofones del agravio.

Octavo: Que, estas normas de rango constitucional imponen un límite y un deber de actuación a los poderes públicos, y en especial a los tribunales nacionales, en tanto éstos no pueden interpretar las normas de derecho interno de un modo tal que dejen sin aplicación las normas de derecho internacional que consagran este derecho a la reparación, pues ello podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado de Chile.

Por esta razón (...), no resultan aplicables a estos efectos las normas del Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles comunes de indemnización de perjuicios, como pretende el recurso, pues ellas contradicen lo dispuesto en la normativa internacional.

Noveno: Que, por último, debe tenerse en consideración que el sistema de responsabilidad del Estado deriva también de los artículos 6 inciso tercero de la Constitución Política de la República y 3° de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, las que, de aceptarse la tesis del recurso, quedarían inaplicadas”².

A su vez, la ltma Corte de Apelaciones de Talca ha señalado que “en lo que liga con la prescripción extintiva de las acciones civiles de indemnización argumentada por el recurrente, y si bien es cierto y conocido que nuestro ordenamiento jurídico establece plazos de prescripción en materia civil, estos sentenciadores no pueden desatender la naturaleza del proceso en el cual se enmarca la presente acción, cual es, sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado de Chile en contra de los demandantes.

En tal sentido, no huelga subrayar que es el propio abogado que alegó en estrados por la parte demandada y recurrente quien en su defensa fija más de una fecha para contar el plazo de la prescripción, señalando el 11 de marzo

² Sentencia Excma. Corte Suprema, causa rol Corte N° 2471-2018.



de 1990 (fecha del retorno a la democracia) y el 14 de marzo de 1991 (fecha en que se conoció el Informe de la Comisión Verdad y Reconciliación, más conocido como Informe Rettig), en circunstancias que los hechos ocurrieron en el mes de febrero de 1974, validando mediante su propio argumento la situación extraordinaria que afectaba a los demandantes en su oportunidad para presentar la acción civil, lo que lógicamente debe tenerse en consideración al momento de decidir aplicar las normas de prescripción contenidas en nuestro Código Civil.

Por otro lado, y siendo un factor relevante en la decisión de este punto, como bien se sabe nuestra Carta Fundamental por vía del inciso 2° del artículo 5 nos vincula directamente con todo aquel Tratado, Pacto o Convenio suscrito y ratificado por el

Estado de Chile, todos los cuales tienen una categoría superior y constitucional cuando se trata de derechos humanos, dentro del cual, desde luego, se encuentra la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, en cuyo artículo 63 inciso 1° se dispone que cuando se han violado los derechos reconocidos en dicha Convención, como sucede en la especie, se debe, entre otras medidas, pagar una justa indemnización.

Con todo, aun cuando la norma anterior no existiera o no resultase aplicable en nuestro derecho, no puede ni debe olvidarse que siempre cuando se trate de un tema de derechos fundamentales, aun en sede patrimonial, la interpretación de las normas debe ser conforme al principio favor persona o pro homine; sin desatender lo prescrito por el artículo 27 de la Convención de Viena - vigente en nuestro país desde el 27 de enero de 1980 - que establece que el Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales, pues de hacerlo comete un hecho ilícito que compromete la responsabilidad internacional del Estado, razones todas que confirman la inaplicabilidad de la prescripción alegada por el recurrente (en el mismo sentido, fallos Roles Núm. 9.757-2015, 20.580-2016 y 83.348-2016, de la Excma. Corte Suprema)³.

9°) Que no puede olvidarse que se trata un derecho fundamental el acceder a una reparación integral; así lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde si bien es cierto, la mayoría de los procesos que

³ Sentencia Corte Apelaciones de Talca, rol N° 640-2017 - Civil, considerando 6°.



llegan ante ella es por crímenes o temas penales, el acceso efectivo a la justicia debe evaluarse integralmente, comprendiendo en ello, también si hubo acceso en materia civil a las reparaciones⁴. Y la sentencia del caso del “*Penal Miguel Castro Castro con Perú*”⁵, señala que el impedimento del derecho de acceso a la justicia de las víctimas o sus familiares se extiende incluso en el plano de las compensaciones económicas por los daños causados con el ilícito penal y ello acontece desde que el Estado omite “...llevar a cabo investigaciones y procedimientos internos suficientemente rigurosos para contrarrestar el encubrimiento realizado...”⁶. Lo cual constituye una justificación y explicación clara de porque no es admisible en este tipo de crímenes la institución de la prescripción, puesto que se debe reparar en todos los ámbitos (porque siempre es el Estado el sujeto pasivo) a las víctimas y sus familias, y la prescripción, atendida la naturaleza de estos crímenes, atenta contra esta reparación integral. Por ello es que existe una convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, y si bien Chile no la ha ratificado formalmente, sus normas y principios (que son coherentes con la dignidad de la persona, la progresividad de los derechos fundamentales y la eficacia de su protección) se incorporan materialmente mediante el artículo 5 inciso 2° de la Carta Fundamental que le pone como límite al legislador, “*el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana*”, por lo que existe norma material sustantiva sobre el tema.

10°) Que por todo lo razonado precedentemente, es que este disidente está por confirmar el fallo apelado.

Redacción del voto de mayoría de la Ministro (s) doña Isabel Salas Castro; y del voto de minoría, por su autor.

4° “120. En relación con la existencia de un recurso efectivo para reparar las consecuencias de las violaciones cometidas, el Estado alegó que ‘los familiares de las víctimas han tenido [pleno] acceso a la justicia, [tanto a] la jurisdicción civil ordinaria para el reclamo de la indemnización por daños y perjuicios...’.” Sentencia, Corte IDH, caso “La Masacre de Pueblo Bello contra Colombia”, 31 de enero de 2006, considerando 120.

5° Sentencia Corte IDH, caso “Del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú”, de 25 de noviembre de 2006, párrafo 369.

6° “369. La Comisión alegó la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención, respecto de lo cual señaló que: □ (...) h) se ha impedido el acceso a la justicia de las presuntas víctimas o sus familiares, incluso en el plano de una compensación económica, debido a que la obtención de la reparación civil por los daños ocasionados como consecuencia de un hecho ilícito tipificado penalmente, se encuentra sujeto al establecimiento del delito en un proceso de naturaleza criminal; □ i) a pesar de que el Estado ha manifestado que tras la adopción del informe de la Comisión ha emprendido una nueva investigación de los hechos a través de la fiscalía especial sobre desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, las contravenciones de los artículos 1, 8 y 25 de la Convención se consumaron desde que el Estado omitió llevar a cabo investigaciones y procedimientos internos suficientemente rigurosos para contrarrestar el encubrimiento realizado...”.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Rol 1421-2019 acumulado con Rol 673-2020 y 674-2020 Civiles.

Se deja constancia que pese haber concurrido a la vista de la causa, no firma la Ministra (S) doña Isabel Salas Castro por haber cesado en sus funciones.



Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Talca integrada por Ministro Gerardo Favio Bernalles R. y Abogado Integrante Abel Bravo B. Talca, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno.

En Talca, a diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

